TEMA: INTERPRETACIÓN PLURAL DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS (Derechos a la libre determinación y territorialidad, aplicación de estándares supraestatales, tierra y territorio)

Sentencia Constitucional Plurinacional 572/2014 (fundadora)

1. Síntesis del caso

En esta acción popular la comunidad indígena "Takana El Turi Manupare II" a través del Presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando CIPOAP, denunció la vulneración de los derechos colectivos al hábitat, al domicilio y al debido proceso porque el particular demandado, irrumpió violentamente en las tierras fiscales que habitan, quemó catorce casas recién construidas ejerciendo en contra del pueblo violencia física y psicológica, por lo que se solicitó se conceda la tutela y se disponga el cese de cualquier acto de agresión física y psicológica contra la comunidad accionante, se remitan antecedentes al Ministerio Público y se proceda al pago de daños y perjuicios. El Tribunal Constitucional Plurinacional, confirmó la resolución del Tribunal de Garantías y concedió la tutela petitionada ratificando lo dispuesto en la resolución objeto de revisión. Además, dispuso: i) Que la comunidad indígena accionante retorne a su territorio ancestral catalogado como "tierra fiscal no disponible"; ii) exhortó al INRA de Pando y a la ABT a definir la situación del territorio en conflicto a partir de la interpretación realizada en el FJ III.4.3; iii) Exhortó al INRA de Pando, ABT y Juez Agroambiental del Departamento de Pando a aplicar los criterios de interpretación desarrollados en la sentencia; iv) ordenó la difusión de la sentencia a la ABT, INRA y a la jurisdicción agroambiental, así como a los diferentes Tribunales Departamentales de Justicia y a las organizaciones de los pueblos indígenas; v) Dispuso que la CIPOAP informe a este Tribunal, a través de la unidad de Coordinación Departamental, en el plazo de un mes, sobre el retorno pacífico al territorio indígena. La concesión de tutela se basa en lo siguiente; vi) Dispuso que el Tribunal de Garantías efectúe el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta sentencia, exigiendo los informes pertinentes a la ABT e INRA sobre el tercer punto dispuesto en este fallo; y, vii) Dispuso que la Unidad de Coordinación Departamental de Pando supervise el cumplimiento de la sentencia. Las razones

de la decisión fueron las siguientes: 1) El demandado, al no ser titular de una concesión forestal y al desalojar mediante vías de hecho a la comunidad "Takana El Turi Manupare II" de su territorio ancestral y en relación al cual ejerce sus derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, vulneró su derecho colectivo al hábitat, impidiendo por tanto que dicho pueblo en el marco de la reconstitución territorial desarrolle sus específicas formas de vida, su organización social y política, su cultura y su espiritualidad y aproveche sus recursos naturales; y, 2) el particular demandado al desalojar violentamente a la comunidad "Takana El Turi Manupare II" de su territorio ancestral y en relación al cual ejerce sus derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, vulneró su derecho colectivo al debido proceso en su elemento a la defensa, ya que no pudo defenderse de manera adecuada y a través de sus representantes, de acuerdo a sus formas de organización.

2. Extracto del precedente constitucional

FJ III.4 El derecho al hábitat y los recursos naturales III.4.1. El derecho al hábitat desde la mirada indígena

El art. 19.I de la CPE, señala que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. El hábitat hace referencia al conjunto de condiciones ambientales y materiales que permiten la satisfacción de necesidades vitales y la supervivencia de una especie. Tratándose de los seres humanos, la definición de hábitat tiene que considerar, además, factores económicos, sociales y culturales que faciliten o limiten el acceso a los bienes y servicios que una sociedad. Ahora bien, este derecho al hábitat se encuentra estrechamente vinculado con el art. 30.4 de la CPE, que se refiere al derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a la libre determinación y territorialidad, complementado por el numeral 6 del mismo artículo que hace referencia al derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios; finalmente el numeral 10 del art. 30 de la CPE, hace referencia al derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a "vivir en un ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas".

De dichas disposiciones se infiere el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a su hábitat, que es concebido no sólo en el ámbito limitado de la tierra, sino también del territorio, entendido como el espacio ancestral, donde se desarrolla la cultura, espiritualidad, historia y forma de organización social y política los pueblos indígenas, donde ejercen el control sobre los recursos naturales y se despliegan todas sus instituciones. Es que la Constitución Política del Estado señala la especial relación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con la tierra y el territorio; afirmación que, además ya se encontraba en el Convenio 169 de la OIT, al señalar en el art. 13 que: "...los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con

las tierras o territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación". En ese sentido, el mismo artículo del Convenio, en su numeral 2, de manera expresa sostiene que la utilización del término tierras debe incluir el concepto de territorios, "lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera" (las negrillas son agregadas). Dada la importancia de esta relación y de la ancestralidad del territorio de los pueblos indígenas, el art. 14 del citado Convenio señala que los Estados deben reconocer: "...a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes" (el resaltado fue añadido). En ese sentido, el art. 14.2. del Convenio 169 de la OIT, establece que: "Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión" y, el párrafo 3, que: "Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados" (el remarcado es agregado).

Ahora bien, conforme se ha visto, el término territorio, comprende a los recursos naturales existentes en él, por ello, el art. 15 del Convenio 169 de la OIT, establece que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus territorios: "deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos". Estas normas fueron consideradas por la Corte Interamericana en el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001, y pronunciada en virtud a que los integrantes de la comunidad Mayagna reclamaron la titularización de sus tierras tradicionales al Estado de Nicaragua sin obtener respuesta favorable, surgiendo el conflicto a partir que empresas transnacionales ingresaron a las tierras de la comunidad para la explotación de recursos forestales, motivo por el cual la comunidad hizo sus reclamos en la vía judicial sin resultados positivos.

La Corte consideró que la comunidad Awas Tingni tiene derechos colectivos a sus tierras tradicionales, recursos y medio ambiente, y que la falta de reconocimiento, garantía, respeto e implementación efectiva de ese derecho estaba en conflicto con las obligaciones estatales derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta Sentencia, la Corte concluyó que: "los miembros de la Comunidad Awas Tingni tienen derecho de propiedad sobre las tierras que habitan actualmente", y que el Estado debía garantizar el respeto

por los derechos territoriales, que incluye la emisión y el registro de títulos formales y la demarcación para fijar y hacer conocer los límites del territorio. Por su parte, la misma Corte, en el Caso del Pueblo Saramaka contra Surinam, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 28 de noviembre de 2007, estableció que "Los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado (...) y ocupado tradicionalmente durante siglos(...) De allí la necesidad de proteger las tierras y los recursos que han usado tradicionalmente: para prevenir su extinción como pueblo(...) el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio" (el resaltado es nuestro). También debe mencionarse al caso Yakye Axa contra Paraguay, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los pueblos indígenas que hubieren perdido sus tierras por causas ajenas a su voluntad, no han perdido completamente sus derechos sobre sus territorios tradicionales, manteniendo su pretensión válida, pues: "Los Estados ...deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida(...) Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros". Así frente a un conflicto entre los derechos de los pueblos indígenas y la propiedad privada, la Corte se inclina hacia el reconocimiento de prioridad del derecho de propiedad comunal indígena, sin perjuicio de la indemnización que pueda corresponder al propietario de buena fe; aclarando sin embargo que "Esto no significa que siempre que estén en conflicto los intereses territoriales particulares o estatales y los intereses territoriales de los miembros de las comunidades indígenas, prevalezcan los últimos sobre los primeros"; pues los Estados pueden verse imposibilitados, por razones concretas y justificadas a devolver el territorio, supuesto en el cual, los pueblos indígenas tienen derecho a la "elección y entrega de tierras alternativa, el pago de una justa indemnización o ambos", debiendo los pueblos participar en la elección de las tierras. También debe hacerse mención al caso Sawhoyamaya contra Paraguay, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo referencia al derecho a la reivindicación de los pueblos indígenas respecto a sus territorios ancestrales, señalando que "...la base espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales.

Mientras esa relación exista, el derecho a la reivindicación permanecerá vigente, caso contrario se extinguirá"; aclarando que: "Dicha relación puede expresarse de distintas maneras, según el pueblo indígena del que se trate y las

circunstancias concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos, caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier otro elemento característico de su cultura" (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, el art. 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de manera expresa señala que: "1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de las tierras de los pueblos indígenas de que se trate" (las negrillas son agregadas).

Debe considerarse que las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la mayoría de los casos, todavía habitan en su territorio o realizan actividades en él, aunque no tengan un asentamiento permanente en el territorio que vivieron sus antepasados y ancestros, siendo para ellos, la tierra no un simple bien o un medio de producción, sino parte de su vivencia, de su ser, de su existencia, concebida como una integralidad, la casa en la cual vivieron sus antepasados, el territorio que vio el comienzo de los tiempos, viviendo en comunidad con sus hermanos, plantas animales y otros seres a quienes se les llama "achachilas", "Awichas", "Waq'as", etc. Entonces, el hábitat de los indígenas, comprende no sólo la tierra, sino también el territorio; es decir, abarca el espacio ancestral donde se desarrolla sus específicas formas de vida, donde se desarrolla su cultura, espiritualidad, su organización social y política, así como sus conocimientos en relación a los recursos naturales y se despliegan todas sus instituciones. Así, todo ese espacio geográfico es su casa grande, donde todas las cosas pertenecen a todos y a nadie en particular, bajo una comprensión integral, entonces su hábitat, son sus ríos, cerros, montañas, cascadas, bosques, plantas, árboles etc., cada uno en su especie, están llenos de significados profundos sobre la cosmovisión de estos pueblos, para ellos el hábitat es el santuario, pues allí está su medicina, sus alimentos, lo que da vida, lo que mantiene y alivia el espíritu, es el principio y el fin, es su vida misma, en conexión con el "multiverso" y aún después de la muerte sus "ajayus" estarán allí, bajo otra forma de expresión, por ello deben ser preservados y respetados.

El hábitat de las naciones y pueblos indígenas, es fundamental para su pervivencia y continuidad, por ello es que las diferentes normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen la importancia fundamental de los derechos territoriales indígenas, y la necesidad de garantizarlos y establecer los mecanismos necesarios para su

materialización; pues, de no hacerlo, se atenta contra la existencia misma de estos pueblos. Los pueblos indígenas tienen prácticas y concepciones propias, donde la tierra y el territorio son compartidos y heredados de generación en generación, con un valor de uso y no de cambio, dichas concepciones devienen de una concepción que va más allá del sentido de "propiedad" o "apropiación", por cuanto la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas está vinculada a la naturaleza, que no es objeto de apropiación sino también sujeto de derechos. Es la casa grande, donde cada nación, pueblo y comunidad indígena tiene el derecho de usar, gozar, disfrutar y administrar un bien material o inmaterial, cuya titularidad pertenece a todos y cada uno de sus miembros y que es fundamental, como se tiene señalado, para la existencia misma del pueblo indígena. Conforme a las normas antes referidas y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que los pueblos indígenas tienen derecho a la titulación de las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado; derecho que se extiende a los recursos naturales que se encuentran en los mismos. Para la materialización de este derecho tanto el Convenio 169 de la OIT, como la Declaración de las Naciones Unidas, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para determinar las tierras de los pueblos indígenas, garantizando su protección, además de instituirse procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas.

Ahora bien, conforme se ha visto, los procesos de reconstitución de las tierras y territorios puede ser solicitada por los pueblos indígenas, debiendo los Estados tomar en cuenta la naturaleza de los derechos territoriales indígenas, que tienen un concepto más amplio y diferente, y que se relacionan con el derecho colectivo de reconstitución de sus territorios como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, de sus instituciones y plan de vida. Por ello, la misma Corte se inclinó por la prevalencia de los intereses territoriales indígenas por sobre los particulares estatales, aclarando, empero que ello no significa que en todos los casos se de esta prevalencia, pues pueden existir razones concretas y justificadas que impidan devolver el territorio, supuesto en el cual, los pueblos indígenas tienen derecho a elegir y a que se les entreguen tierras alternativas, el pago de una justa indemnización o ambos.

III.4.2. Derecho al aprovechamiento de los recursos naturales

Como se ha señalado en el anterior Fundamento Jurídico, el derecho al aprovechamiento de los recursos naturales se encuentra dentro del alcance del derecho a la tierra y al territorio, y está inserto en el derecho al hábitat, concebido, de manera integral como el espacio ancestral donde se desarrolla la vida social, económica, cultural, jurídica y espiritual de la comunidad, y donde, precisamente se aprovechan y se usan sosteniblemente los recursos naturales, y así lo reconoce el art. 15 del Convenio 169 de la OIT, que determina, como ya se ha señalado, que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la

utilización, administración y conservación de los recursos naturales. En igual sentido, el art. 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece el deber de los Estados de asegurar el reconocimiento y protección no sólo de las tierras y territorios, sino también de los recursos naturales. En nuestra Constitución también se reconoce el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales en el art. 30.17, norma que establece como derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos: "A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros" (las negrillas son nuestras). En ese sentido, debe señalarse que el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio indígena por parte del Estado o particulares que hubieren adquirido legítimamente ese derecho dentro del territorio indígena, se debe desarrollar sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos, previa información y consulta de las comunidades, naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes, de conformidad al art. 30.17 de la CPE, tienen derecho preferente sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio.

3. Extracto de la ratio decidendi

FJ III.6.4 "De acuerdo a las conclusiones a las que se arribaron en los puntos precedentes, se tiene que el demandado, de manera ilegal, amparado en supuestos derechos expectativos y una concesión forestal que fue desistida, desalojó a la comunidad "Takana El Turi Manupare II" del territorio en el que se encontraba asentada que, como se tiene señalado, tiene carácter ancestral y sobre el cual el pueblo indígena Takana ejerce sus derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En ese ámbito debe quedar claramente establecido que el asentamiento de la comunidad "Takana Manupare II", **desde una interpretación plural del territorio**, considerando la cosmovisión del pueblo indígena Takana, bajo ninguna circunstancia puede ser considerado ilegal, pues, corresponde a su territorio ancestral y es coherente con los procesos de reconstitución de sus territorios ancestrales, el cual, conforme se ha explicado, es concebido integralmente, como el espacio de producción y reproducción de vida, en el que vivieron y murieron sus abuelos, donde encuentran los recursos necesarios para la vida, y desarrollan sus instituciones sociales, políticas y económicas.

El territorio así concebido, integra a los elementos físicos y espirituales, a la comunidad humana y la naturaleza, en una relación que busca el equilibrio, siendo los recursos naturales aprovechados para la sobrevivencia de la comunidad y, en especial, la castaña recolectada, les permite cubrir las necesidades de la familia que es a su vez parte de su vida digna necesariamente vinculada a su territorio.

Entonces, el demandado, al desalojar a la comunidad "Takana Manupare II", ejerciendo además, violencia sobre los miembros de dicha comunidad, efectivamente lesionó su territorio ancestral e impidió que los miembros de la comunidad continuaran usando y aprovechando los recursos naturales provenientes del mismo. En ese marco, y toda vez que, además de las vías de hecho del demandado, existen resoluciones que emanaron del Juez Agroambiental del departamento de Pando, es preciso analizar su actuación que, por una parte homologó el acuerdo dentro del proceso interdicto seguido por el actual demandado, negando la participación de la CIPOAP y, por otra, emitió el mandamiento de lanzamiento contra los miembros de la comunidad "Takana El Turi Manupare II"; pues si bien dicha autoridad judicial no ha sido demandada, es imprescindible hacer mención a su actuación, con la finalidad de desvirtuar una pretendida ejecución de una orden judicial de lanzamiento. Así, con relación al acuerdo suscrito, es evidente que la citada autoridad judicial no consideró los derechos de los pueblos indígenas al hábitat, al territorio y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y tampoco tomó en cuenta la cosmovisión del pueblo Takana respecto a su territorio al homologar un documento contrario a sus derechos y ordenar el desalojo de su territorio ancestral.

Efectivamente, a través del acuerdo, el Juez de la causa actuó sin precautelar los derechos del pueblo indígena Takana, homologando una renuncia a su derecho ancestral al territorio y a los recursos naturales que les correspondían, estableciendo plazos para el desalojo del territorio, bajo amenazas de usar la fuerza pública, sobre la base -se reitera- de derechos expectaticios y una concesión forestal inexistente. Además, en el acuerdo se imponen condiciones a la actividad de recolección de la castaña realizada por el pueblo Takana, estableciendo un precio único y la exclusividad de la venta de lo recolectado, lo que evidentemente resulta, a todas luces, desproporcionado y lesivo a sus derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y su derecho a la libre determinación. El acuerdo antes anotado fue cuestionado por las autoridades indígenas de la CIPOAP, debido a que ellas no tuvieron participación; sin embargo, la autoridad judicial con un criterio formalista y desconociendo la organización del pueblo indígena Takana y sus niveles de representación, negó dicha participación, señalando que la CIPOAP no era parte en el proceso y que el acuerdo tenía calidad de autoridad de cosa juzgada, no obstante las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas; agravando las mismas al disponer, como se tiene señalado, el desalojo de la comunidad "Takana El Turi Manupare II"; desalojo que se ejecutó, además, con violencia hacia los miembros de la dicha comunidad y que derivó -como señalan los testimonios- en la dispersión de las familias, que no cuentan con un hábitat y donde vivir, afectando, además, otros derechos, colectivos e individuales de la comunidad y sus miembros, como el derecho a la dignidad y a la vivienda. En definitiva se concluye que las acciones realizadas por el demandado, que como se ha concluido constituyen vías de hecho, tampoco encuentran amparo en el lanzamiento dispuesto por el

Juez Agroambiental del departamento de Pando; pues, dicha decisión, conforme se ha analizado, es absolutamente lesiva a los derechos del pueblo indígena Takana y, por ende, no puede ser el sustento ni la legitimación de acciones que, además de continuar con la vulneración de derechos, las agrava, al ejercer violencia sobre los miembros de la comunidad indígena, conforme se constata de los informes presentados a este Tribunal, donde se informa –como se ha explicado– que se quemaron catorce viviendas; información que además se confirma con las fotografías que se adjuntan al expediente y que demuestran los actos ilegales cometidos por el demandado.

En conclusión, se reitera que el asentamiento de la comunidad Takana desde ninguna perspectiva puede ser considerado ilegal, pues ello implicaría desconocer el proceso de reconstitución de su territorio ancestral y del aprovechamiento de los recursos naturales y, en ese ámbito, es evidente que la comunidad tiene derecho a continuar con sus actividades de recolección de castaña...”.

4. Síntesis de la ratio decidendi

Concede la acción popular porque el demandado, al no ser titular de una concesión forestal y al desalojar mediante vías de hecho a la comunidad “Takana El Turi Manupare II” de su territorio ancestral y en relación al cual ejerce sus derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, vulneró su derecho colectivo al hábitat, impidiendo por tanto que dicho pueblo en el marco de la reconstitución territorial desarrolle sus específicas formas de vida, su organización social y política, su cultura y su espiritualidad y aproveche sus recursos naturales.

TEMA: INTERPRETACIÓN PLURAL DE PRINCIPIOS Y VALORES (principio y valores de la sociedad plural, aplicación normativa en la pluralidad de las jurisdicciones, celeridad)

Sentencia Constitucional Plurinacional 0112/2012 (fundadora)

1. Resumen

Las normas constitucionales-principios, entre ellas, los principios ético-morales de la sociedad plural tienen carácter normativo y, por tanto, imponen a todos, y con mayor razón a los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria.

2. Síntesis del caso

En esta acción de libertad, el accionante denunció que en evidente dilación y negligencia en la consideración de su solicitud de cesación a su detención preventiva, además de suspender audiencias injustificadamente, entendiéndole que su solicitud se consideraría a la conclusión del juicio oral y, no obstante que interpuso recurso de reposición contra esta última determinación, solicitando que dentro de las veinticuatro horas se convoque a una nueva audiencia, la misma fue mantenida mediante resolución judicial expresa; considerando lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad, pidiendo en definitiva se fije de forma inmediata hora y día de audiencia. El Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó la concesión de la tutela y ordenó se considere en forma inmediata la solicitud.

3. Contextualización de la línea jurisprudencial

El Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló la línea jurisprudencial sobre la obligación de observancia de las normas constitucionales-principios por parte de los operadores de justicia, que puede ser constituida de acuerdo a los siguientes precedentes constitucionales: 1. Con relación a los principios ético-morales constitucionalizados, la SCP 0015/2012, estableció que éstos "constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia

cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales", encontrándose los jueces "en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional". Es así que estableció como precedente constitucional que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla (no seas flojo) tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación a detenciones preventivas. 2. Posteriormente, la SCP 0112/2012, como precedente fundador, determinó el carácter normativo de los principios ético morales y la obligación de los jueces de la pluralidad de jurisdicciones de observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria.

4. Precedente constitucional

Esta Sentencia en su FJ. III.1.2.1 dispone: "(...) las normas constitucionales-principios, establecidas en el texto constitucional tienen validez normativa, prelación jerárquica y son obligatorias respecto a las normas constitucionales-reglas y con mayor razón con relación a las normas legales-reglas (contenidas en las leyes en sentido general sustantivas o procesales) por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución, una Constitución ideada dentro del modelo de Estado Constitucional, con todo lo que ello implica. (...) Estos mandatos jurídicos son para todo el poder público y para la convivencia social de los ciudadanos.

A los legisladores (del nivel central-Asamblea Legislativa Plurinacional, las entidades territoriales autónomas) y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos), al momento de realizar desarrollo legislativo o en la interpretación y aplicación del Derecho Indígena "en sentido de que en el proceso de creación de las normas no ignore los principios, toda vez que al ser estos la base en la que se inspira el modelo de sociedad que la Constitución propugna, debe existir coherencia y armonía entre la ley a crearse y los principios de la Constitución". Al Órgano Ejecutivo, en el ejercicio de su potestad reglamentaria (emisión de decretos supremos, resoluciones supremas, etc.), a las autoridades judiciales o administrativas en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, como defensor y garante de la Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana. (...) Finalmente, las normas constitucionales-principios, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en el resto de las normas constitucionales y todo el ordenamiento jurídico. En efecto, la base principista, fundamentalmente contenida en la parte dogmática de la Constitución (principios, valores, derechos y garantías), guían la acción de los órganos del poder público y de la propia convivencia social, o lo que es lo mismo, la organización del poder (parte orgánica) que debe desarrollarse sobre la base de la parte dogmática. Más adelante esta Sentencia en su FJ. III.2 establece: "Los principios ético-morales, antes de ser incorporados a la Constitución, tenían valor únicamente para el

Derecho Indígena, es decir, eran estimados como valiosos por la cultura y el Derecho de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos. Después de efectuada su incorporación en el texto constitucional tienen valor de derecho, es decir se convierten en normas y, por tanto, comparten la eficacia jurídica de la propia Constitución, es decir, tienen carácter normativo, lo que implica que no son meras declaraciones retóricas, por lo mismo, imponen a todos, esto es, al poder público y los particulares en la convivencia social, con mayor razón a todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria cotidiana".

5. Síntesis de la ratio decidendi

Concede la acción de libertad, por cuanto la autoridad judicial demandada no observó las normas constitucionales-principios referidas al: derecho fundamental a la libertad personal, la dignidad de la persona, el principio ético-moral de la sociedad plural, "ama qhilla" y los principios procesales de celeridad y respeto a los derechos; incurriendo en demora injustificada en la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, al suspender en reiteradas oportunidades dicha solicitud y condicionar su consideración a la celebración previa de juicio oral.

(Confirmado por la SCP 1574/2012 de 24 de septiembre de 2012)

Compilación realizada en base al buscador jurisprudencia de la página del Tribunal Constitucional, mi labora fue seleccionar e identificar las sentencia relevantes que considero pertinentes para el trabajo, el contenido fue extractado de las sentencias referidas.

TEMA: INTERPRETACIÓN PLURAL DESDE LA DEMOCRACIA COMUNITARIA (Derecho a ejercer sus sistemas jurídicos, políticos y económicos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos)

Sentencia Constitucional Plurinacional 2114/2014 (fundadora)

1. Extracto del precedente jurisprudencial

En el ámbito de la democracia comunitaria, cuando las autoridades hubieren sido electas, designadas o nominadas por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la revocatoria de mandato o alejamiento de sus funciones debe efectivizarse mediante sus propias instancias de decisión y procedimientos.

2. Síntesis del caso (problema jurídico)

En esta acción de amparo constitucional, el accionante denunció la lesión de sus derechos de petición, al trabajo y al ejercicio de la función pública, así, como a no ser obligado a hacer lo que la Constitución Política del Estado y las leyes no manden, por cuanto fue obligado, bajo presión y amenazas, a firmar una carta de renuncia al cargo de Concejal Titular que venía ejerciendo, y no obstante las reiteradas solicitudes para que se deje sin efecto la renuncia forzada, el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal Indígena de Chuquiuhuta, rechazó dicha pretensión; en consecuencia, solicitó su restitución al cargo de Presidente del Concejo Municipal Indígena de Chuquiuhuta y se declare la nulidad de la carta de renuncia más pago de daños y perjuicios, costas y remisión de antecedentes al Ministerio Público. El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la resolución del tribunal de garantías y denegó la tutela al considerar que la renuncia del accionante respondió a los acuerdos asumidos en el ejercicio de la democracia comunitaria, que fue la que finalmente hizo posible su elección como autoridad, no pudiendo ampararse en las normas provenientes del sistema ordinario.

3. Contextualización de la línea jurisprudencial

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre el derecho a ejercer funciones públicas en los casos de suspensión, destitución y revocatoria de mandato de alcalde y concejales municipales, conforme a los siguientes precedentes constitucionales: 1. Inicialmente el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0035/2012, estableció que los casos de renuncia de alcaldes titulares, en los que no corresponda la elección por voto popular, los Concejos Municipales tienen la atribución de elegir a una nueva autoridad, quedando en este caso sin efecto los interinatos anteriormente designados; 2. Posteriormente, la SCP 0473/2012, entendió que la suspensión temporal o definitiva de alcaldes y concejales, sólo puede darse en los casos previstos por ley y previo cumplimiento del procedimiento establecido en ella. La primera Resolución que desarrolló este entendimiento fue la SC 1129/2000-R, que señaló, en el caso concreto, que no se presentaron "...en cuanto al recurrente ninguna de las condiciones que puedan dar lugar a su suspensión temporal o definitiva de sus funciones de Concejales Municipales", añadiendo que "...los recurridos han vulnerado lo previsto por los arts. 36 y 37 de esta Ley con referencia a la sanción impuesta y al proceso previo de suspensión, conculcando así la garantía del debido proceso, que de acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional, es plenamente aplicable a los sumarios informativos y a otro tipo de procesos administrativos; en consecuencia, los recurridos han desconocido los derechos del recurrente al libre acceso a la función pública y al trabajo, consagrados en los arts. 40-2) y 7-d) de la Constitución Política del Estado". 3. A su vez, la SCP 0567/2012 determinó que la suspensión o destitución de Alcaldes y Concejales Municipales debía seguir el procedimiento previsto en la ley (Ley Marco de Autonomías y Descentralización), no estando reconocido el ejercicio de la violencia ni el supuesto cumplimiento de resoluciones ni determinaciones de la comunidad; sin embargo, cabe precisar que si bien la SCP 567/2012, siguió la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0085/2004-R, 1247/2010-R, que establecieron que debe darse cumplimiento al procedimiento legal para la suspensión o destitución de concejales o alcaldes; **empero, debe mencionarse que, a partir de los principios y características de nuestro modelo de Estado, en especial la democracia comunitaria, la SCP 2114/2013, considerada como moduladora, entendió que en el ámbito de la democracia comunitaria, cuando las autoridades hubieren sido electas, designadas o nominadas por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la revocatoria de mandato o alejamiento de sus funciones debe efectivizarse mediante sus propias instancias de decisión y procedimientos; asimismo, precisó que: "... los acuerdos y consensos alcanzados como ejercicio de la democracia comunitaria deben ser respetados; pues es esta democracia la que da fundamento, sustento y legitimidad a la representación política "formal", que finalmente ejercen los elegidos. En ese ámbito, no resulta coherente que aquellas autoridades que fueron elegidas a través de la lógica comunitaria, luego pretendan ampararse**

en la lógica y el sistema occidental, desconociendo los propios valores y principios de la comunidad, así como sus normas, procedimientos e instituciones, los acuerdos y compromisos asumidos con anterioridad; aclarándose, empero, conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, que en caso de lesionarse derechos y garantías constitucionales, es posible que el afectado, presente las acciones de defensa previstas en la Constitución Política del Estado ante la justicia constitucional, que, en el marco del constitucionalismo plurinacional, comunitario y descolonizador, deberá efectuar una interpretación intercultural de los derechos y garantías. Bajo las consideraciones efectuadas precedentemente, es evidente que los acuerdos asumidos al interior de las comunidades deben ser respetados por sus miembros y las autoridades elegidas, y si no se respetan, es lógico que a través de sus procedimientos e instituciones, se solicite a dicha autoridad que cumpla con los compromisos asumidos, aclarándose, empero, que bajo ninguna circunstancia se puede hacer uso de la violencia o ejercer vías de hecho, fuera de la institucionalidad propia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos". 4. En este sentido, la SCP 1708/2013 que estableció que las renunciaciones de mujeres a cargos públicos de elección por voto popular deben ser presentadas de manera personal ante el Órgano Electoral Plurinacional; así como la SCP 1781/2013, que entendió que es arbitraria e ilegal condicionar la restitución al cargo de alcaldes municipales a la conformidad de la sociedad civil organizada, deben ser comprendidas en correspondencia con el enfoque plural y los principios rectores de la **democracia comunitaria** establecidos por la SCP 2114/2013.

4. Extracto del precedente constitucional

Fj. III.3. "...la elección mediante la democracia comunitaria es conocida, aceptada y ejercida plenamente por las comunidades, de ello se concluye que la persona que ingresa a la representación política mediante la democracia comunitaria, debe respetar las reglas de dicha democracia, como ser los acuerdos, el muyu, etcétera. (...) De ahí que esta Sala considere que los acuerdos y consensos alcanzados como ejercicio de la democracia comunitaria deben ser respetados; pues es esta democracia la que da fundamento, sustento y legitimidad a la representación política "formal", que finalmente ejercen los elegidos. En ese ámbito, no resulta coherente que aquellas autoridades que fueron elegidas a través de la lógica comunitaria, luego pretendan ampararse en la lógica y el sistema occidental, desconociendo los propios valores y principios de la comunidad, así como sus normas, procedimientos e instituciones, los acuerdos y compromisos asumidos con anterioridad; aclarándose, empero, conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, que en caso de lesionarse derechos y garantías constitucionales, es posible que el afectado, presente las acciones de defensa previstas en la Constitución Política del Estado ante la justicia constitucional, que, en el marco del constitucionalismo

plurinacional, comunitario y descolonizador, deberá efectuar una interpretación intercultural de los derechos y garantías.

Bajo las consideraciones efectuadas precedentemente, es evidente que los acuerdos asumidos al interior de las comunidades deben ser respetados por sus miembros y las autoridades elegidas, y si no se respetan, es lógico que a través de sus procedimientos e instituciones, se solicite a dicha autoridad que cumpla con los compromisos asumidos, aclarándose, empero, que bajo ninguna circunstancia se puede hacer uso de la violencia o ejercer vías de hecho, fuera de la institucionalidad propia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

5. Extracto de la ratio decidendi

Fj. III.4. De acuerdo a los antecedentes relatados, se evidencia que efectivamente el actual accionante fue elegido de acuerdo a las normas y procedimientos de la democracia comunitaria, y así lo reconoció el mismo al señalar que fue elegido por el Cabildo Kuyku que forma parte del ayllu Jucumani.

En ese marco, existió un convenio inicial con relación a la duración de su mandato únicamente por dos años y medio, con la finalidad que el resto de su mandato fuera cumplido por la concejala suplente. Asimismo, consta que la máxima instancia de la democracia comunitaria, como es el Cabildo del ayllu Jucumani se reunió en varias oportunidades, solicitando el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte del accionante, quien, además, manifestó de viva voz que respetaría la decisión del ayllu y que conversó con la suplente para que alistara su documentación.

Conforme a ello, es evidente, entonces que el accionante, asumió un compromiso en el marco de la democracia comunitaria, que tiene plena validez constitucional, conforme se concluyó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y, por ende, su renuncia de ninguna manera puede ser considerada como un acto que atente contra sus derechos y garantías constitucionales; pues, en el marco de los acuerdos asumidos en la máxima instancia de decisión que es el cabildo y las autoridades originaria del ayllu Jucumani, sabía la forma y el tiempo por el que elegido y, en ese ámbito, correspondía que cumpliera con los compromisos asumidos, como se señaló en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo. Bajo ese razonamiento, bajo ninguna circunstancia son aplicables los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la renuncia de las autoridades electas, pues los mismos parten de la democracia representativa y no así de la democracia comunitaria, la cual, conforme se tiene señalado, se ejerce sobre la base de sus normas y procedimientos propios, en el marco de los acuerdos

que deben ser respetados por sus miembros; salvo que, conforme se tiene señalado en los fundamentos precedentes, bajo una interpretación intercultural, se constate la lesión a derechos o garantías constitucionales.

En ese orden, se concluye que en el caso analizado, el accionante, por una parte, asumió compromisos con el ayllu Jucumani en los diferentes cabildos y su renuncia fue fruto del ejercicio de la democracia comunitaria, no siendo evidente, por tanto, que la misma hubiera sido fruto de la violencia o de medidas de hecho, sino que, conforme se demostró fue solicitada a través de las formas y procedimientos del ayllu Jucumani; pues, como se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la revocatoria o el alejamiento de sus funciones de una autoridad también puede estar presente en el ámbito de la democracia comunitaria, cuando las autoridades hubieren sido electas, designadas o nominadas por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, bajo el requisitos que el pedido de revocatoria o cualquier otra modalidad se efectivice mediante sus propias instancias de decisión y procedimientos, respetando los derechos constitucionales y las garantías establecidas en la Ley Fundamental. Debe aclararse que si bien el accionante denuncia que su renuncia fue obligada y que existió presión y violencia; sin embargo, dicha información debe ser contrastada con todos los antecedentes a los que se ha hecho referencia, vinculados a la existencia de los compromisos previos con la comunidad y a los reiterados Cabildos en los que se tocó el tema de la renuncia y el accionante voluntariamente decidió presentarla. Por otra parte, debe señalarse que los supuestos actos violentos han sido negados por las autoridades originarias, la Federación de Juntas Vecinales del Municipio de Chuquihuta, ex autoridades originarias y la presidenta de amas de casa del Municipio de Chuquihuta.

En síntesis, si bien, como afirman los demandados, la ciudadanía, los grupos de base ejercieron presión en la sesión donde renunció el Alcalde; empero, este Tribunal -se reitera- concluye que la renuncia como tal respondió a los acuerdos asumidos por el accionante en el ejercicio de la democracia comunitaria, que fue la que finalmente hizo posible su elección como autoridad, no pudiendo ampararse, ahora, en las normas provenientes del sistema ordinario; en ese sentido, no ha existido lesión a los derechos al trabajo y al ejercicio de la función pública denunciados en la presente acción; pues, ambos derechos, a partir de los principios y valores de nuestra Constitución Política del Estado, deben ser interpretados interculturalmente, desde el contexto cultural donde supuestamente se produce la lesión y, en el caso analizado, es evidente que dichos derechos tienen origen en la democracia comunitaria ejercida en el ayllu Jucumani, que determinó los mecanismos de elección y el tiempo de duración del mandato del accionante y, por lo mismo, no ha existido lesión a sus derechos a partir de las normas y procedimientos de dicho pueblo indígena originario campesino.

6. Síntesis de la ratio decidendi

Deniega la acción de amparo constitucional por no haberse lesionado los derechos al trabajo y ejercicio de la función pública, debido a que el accionante asumió compromisos con el ayllu Jucumani en los diferentes cabildos y su renuncia fue fruto del ejercicio de la **democracia comunitaria** no siendo evidente, que hubiera sido fruto de la violencia o de medidas de hecho, sino que en el marco de los acuerdos asumidos en la máxima instancia de decisión que es el cabildo y las autoridades originaria del ayllu Jucumani, sabía la forma y el tiempo por el que fue elegido, no pudiendo ampararse, ahora, en las normas provenientes del sistema ordinario.

(Confirmada por la DCP 0030/2014 de 28 de mayo)

TEMA: INTERPRETACIÓN PLURAL DEL DERECHO A LA DIGNIDAD (dimensión plural de la dignidad, muerte, espiritualidad desde las cosmovisiones indígenas)

Sentencia Constitucional Plurinacional 2007/2013 (fundadora)

1. Resumen

La retención del cuerpo de la persona fallecida por servidores públicos o particulares constituye una lesión al derecho a la dignidad desde su dimensión plural, por cuanto se lo utiliza como un instrumento para lograr el cumplimiento de obligaciones, afectando además los derechos a la libertad de espiritualidad, religión y culto, al privar a los familiares de la posibilidad de realizar los actos, ritos y costumbres que su espiritualidad, religión y culto mandan.

2. Síntesis del caso

En esta acción de libertad, el accionante denunció que los demandados lesionaron los derechos a la dignidad, a la libertad y los "derechos religiosos", al retener el cuerpo de su madre fallecida, con el argumento de que previamente se debía pagar la suma que se adeuda al Hospital Clínico "Viedma", por los servicios de atención prestados; en consecuencia, solicitó se ordene que el cuerpo de su madre sea entregado de forma inmediata. El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la resolución del tribunal de garantías y concedió la tutela solicitada, por la supuesta lesión al derecho a la dignidad y los derechos conexos a la libertad de espiritualidad, religión y culto del accionante, considerando, además, que el primero de los derechos nombrados (dignidad) puede ser invocado, por extensión, por sus familiares, disponiendo la inmediata entrega del cuerpo de la madre del accionante, exhortando al Hospital Clínico Viedma, a que en el futuro no incurra en similares actos a los denunciados en la presente acción.

3. Extracto del precedente constitucional

Esta Sentencia en su Fj. III.3 dispone: Entonces, si desde la concepción de las naciones y pueblos indígena originario campesinos la vida es un tránsito hacia otros espacios o mundos, la muerte no existe como tal y, por tanto los seres que habitan los diferentes espacios del cosmos conviven en armonía y, el cuerpo de quienes ya no están en la comunidad humana, *ivi* (tierra), tiene un especial significado y valor y, en determinadas fechas y momentos, conviven con los hermanos que sí se encuentran en ese espacio, presentes en los ritos (*yerure*) y las ceremonias que se celebran, por ejemplo el mes de noviembre. Así, desde esa visión, no existe la muerte del ser humano y tampoco se halla la conversión del cuerpo en objeto, “del sujeto en objeto”; pues, en la cosmovisión ancestral, seguimos siendo sujetos más allá de la “muerte” concebida occidentalmente; por eso se habla y se pide ayuda a los “*ajayus*” “*mirata reta*”, quienes se convierten en “*achachilas*”, *iya reta*; es decir, energías individuales que al transitar a otro espacio, se convierten en una energía cósmica que se aloja en los cerros y montes (*kaa*), que son los depositarios de esas energías “*sentipensantes*”. En conclusión desde esta visión, se puede afirmar que el cuerpo de las personas no podría ser utilizado como un medio o instrumento para obtener beneficios económicos o para lograr el pago de deudas o para exigir la realización de alguna actividad, pues, por una parte, el cuerpo mismo, participa de la dignidad de los hermanos que habitan la comunidad humana y, por otra, al utilizar de esa manera el cuerpo, se impide al hombre o la mujer transitar al otro espacio y la realización de los ritos y las ceremonias que coadyuvan a dicho fin.

4. Extracto de la *ratio decidendi*

Fj.III.5. Conforme se ha desarrollado en el Fundamentos Jurídicos III.2, III.3 y III.4 de este fallo, el cuerpo de las personas fallecidas tiene un profundo significado para la familia e, inclusive, para los miembros de la comunidad; por lo que la retención del cuerpo por servidores públicos o particulares constituye una lesión al derecho a la dignidad desde su dimensión plural, por cuanto se utiliza el cuerpo como un instrumento para lograr el cumplimiento de obligaciones, en este caso, pecuniarias, afectando además el derecho a la libertad de espiritualidad, religión y culto, al privar a los familiares de la posibilidad de expresar su dolor por la pérdida de un ser querido, efectuando los actos, ritos y costumbres que su espiritualidad, religión y culto mandan; que es lo que sucedió precisamente, en el caso analizado, en el que se retuvo el cadáver de la madre del accionante, por no haberse cancelado lo adeudado por concepto de internación, lo que ciertamente lesiona el derecho a la dignidad de su madre fallecida, pues se utiliza su cuerpo como una prenda para lograr la cancelación de la deuda, violando el sentimiento y la dignidad de los seres queridos, que pretende efectuar los ritos y costumbres de despedida de conformidad a su espiritualidad, religión y culto. Cabe señalar que si bien la trabajadora social

demandada, negó que el mencionado Hospital, hubiera retenido el cadáver y que el médico tenía listo el certificado médico de defunción; sin embargo, la citada profesional, no ha demostrado con prueba suficiente esta situación y, por el contrario, presenta una copia del certificado de defunción, que si bien se encuentra firmado por el Médico, empero, no cuenta con la fecha de expedición, lo que hace presumir a esta Sala que efectivamente no se otorgó dicho certificado al accionante y que, por tanto, las denuncias efectuadas por él son evidentes. Debe recordarse que, conforme lo ha establecido la SCP 0258/2012 de 29 de mayo, el cobro de deudas emergentes de internación y honorarios médicos; es decir, de los gastos realizados en un nosocomio, cuentan con las vías procesales adecuadas para su cobro; por lo que, ante la falta de cancelación de dichos adeudos, no es posible que procedan a la privación de libertad de un paciente y tampoco, conforme al entendimiento asumido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a la retención del cuerpo de la persona fallecida, puesto que resulta ser una medida de hecho, que desde ningún punto de vista es aceptable, ya que, en el primer caso, implica la vulneración del derecho a la dignidad y, en el segundo, la lesión de los derechos a la dignidad y a la libertad de espiritualidad, religión y culto; los cuales son tutelados por la justicia constitucional, a través de la acción de libertad, conforme se tiene ampliamente señalado.

5. Síntesis de la ratio decidendi

Se concede la acción de libertad, por cuanto se retuvo el cuerpo de la madre fallecida del accionante, por no haberse cancelado lo adeudado por concepto de internación y costos de atención, acto con el que se lesionó a la dignidad de su madre fallecida y los derechos a la libre espiritualidad, religión y culto.

(Confirmada por la SCP 0861/2015-S3)

TEMA: NO FORMALISMO EN CUANTO A DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Sentencia Constitucional Plurinacional 0487/2014 de 25 de febrero

1. Extracto de la ratio decidendi

a) La flexibilización de los requisitos formales y la reconducción procesal de acciones. Se ha señalado que el sistema jurídico ius postivista, como herencia colonial, se ancla en formalismos que, lejos de resolver los conflictos, permite dilatarlos indefinidamente sin obtener justicia, así, en contrapartida, la plurinacionalidad y el pluralismo supone pensar y adoptar medidas que permitan dar soluciones integrales, con celeridad, a los conflictos que se presentan, desterrando toda práctica dilatoria que únicamente se demora en cuestiones formales sin tutelar de manera inmediata los derechos y garantías.

Así, esta Sala considera que, a partir del carácter plural de la justicia, se deben materializar de manera oportuna e inmediata los derechos y garantías tanto en su dimensión individual como colectiva, más allá de los ritualismos procesales y la exigencia de requisitos propios de un sistema jurídico colonial, que debe ser redimensionado a partir de los postulados de nuestra Constitución Política del Estado, lo que implica que dichas exigencias formales no pueden constituirse en un obstáculo para un real acceso a la justicia constitucional, cuando efectivamente se constata la lesión de derechos y garantías constitucionales.

Lo señalado encuentra sustento, **además, en los principios de prevalencia del derecho sustantivo respecto al formal, justicia material, principio pro actione y el principio de no formalismo; los cuales deben ser aplicados con mayor**

fuerza en la justicia constitucional y, en especial, tratándose de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuya tradición jurídica no reconoce las formalidades propias del sistema occidental y, en ese ámbito, deben flexibilizarse los requisitos para materializar su derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.

De lo señalado, esta Sala concluye que es posible flexibilizar los requisitos que impidan un real acceso a la justicia constitucional, conforme lo ha hecho el Tribunal Constitucional en las SSCC 0957/2013, 1697/2013, 1784/2013, 1745/2013, 1883/2013, 1977/2013, 2007/2013, 1414/2013, entre muchas otras; en ese ámbito, también es posible reconducir procesalmente las acciones tutelares cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, como lo ha venido haciendo este tribunal en diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como las SSCCPP 0645/2012, 2271/2012, 210/2013, 897/2013, entre otras; reconducción que se constituye en un deber tratándose de naciones y pueblos indígena originario campesinos, a partir de las características de nuestro Estado, pues, como se analizará en el siguiente punto, de conformidad al art. 8.1) del Convenio 169 de la OIT, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario".

TEMA: DERECHO DE AUTOIDENTIFICACIÓN Y NO EXIGENCIA DE PERSONERÍA JURÍDICA

Sentencia Constitucional Plurinacional 006/2016 de 14 de enero de 2016 (Marca Quila Quila)

1. Síntesis del caso

Pronunciada dentro de una acción de inconstitucionalidad concreta en la que el pueblo indígena originario de Quila Quila, dentro de un proceso de saneamiento de TCO, formuló la indicada acción solicitando se declare la inconstitucionalidad de los arts. 357 y 396.II del DS 29215, en la parte que exige la acreditación de la personería jurídica en las solicitudes de dotación de TCO y la emisión de Títulos, por ser contrarios a los arts. 1.2 del Convenio 169 de la OIT, 33.1 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, así como 30.II.1, 4 y 6; y 410 de la CPE.

2. Extracto de la ratio decidendi

FJ.III.2.1. "...con relación a la exigencia de acreditación de la personalidad jurídica, éste no constituye un requisito habilitante para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, puesto que más bien se trata de un derecho que les asiste, ya que sus facultades organizativas se ejercen y se han ejercido independientemente del reconocimiento que haga el Estado de su condición de sujeto de derechos, preexistentes a la misma estructura estatal, aspecto que indudablemente constituye un deber para el Estado y no así para la nación o pueblo indígena en sí mismo. No contemplar este entendimiento conlleva una interpretación restrictiva que pone en riesgo la eficacia material de sus derechos colectivos. Este entendimiento fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, cuando señaló: "La Corte considera que el otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer operativos los derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen ejerciendo históricamente y no a partir de su nacimiento como personas jurídicas. Sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, y los derechos que ello apareja, como la designación de sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a la persona jurídica que debe inscribirse para

cumplir con un formalismo legal, sino a la comunidad en sí misma que la propia Constitución paraguaya reconoce como preexistente al Estado".
[...]

FJ. III.4. "(...) además del criterio descrito en el art. 1.1.b del citado Convenio, el criterio de la "autoidentificación" reconocido por el art. 1.2 de igual Convenio 169, también debe ser considerado por las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia para efectos de reconocimiento de derechos colectivos de los PIOC. El Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, ha consolidado para los NPIOC, derechos fundamentales de naturaleza colectiva, generando para el Estado obligaciones destinadas a asegurar de forma eficaz dichos derechos, en ese sentido, la autoidentificación como criterio para determinar la existencia de esas colectividades expresamente reconocido en el art. 1.2 del Convenio 169 de la OIT, debe ser asumido por la normativa interna (...).

FJ.III.2. "El reconocimiento de las instituciones representativas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos constituye otro de los derechos provenientes a partir de la libre determinación garantizada por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales que integran el bloque de constitucionalidad con relación a esta temática; derecho a partir del cual, también se garantiza el respeto de sus normas y procedimientos propios, en base a los cuales legitiman sus instituciones representativas, por lo que la acreditación de la representación que éstas asumen no puede ser exigida a través de mecanismos convencionales (testimonio de poder notariado), ya que ello significaría una intromisión del Estado en sus estructuras propias de organización y por ende una transgresión del principio de libre determinación, más aún, cuando el ejercicio de representación se activa para acudir a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos colectivos. En este sentido, y de modo particular tratándose del ejercicio de derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, este Tribunal considera que la facultad de representación que asumen dichas instituciones, se aplica también a la que puedan ejercer en instancias jurisdiccionales y administrativas, la cual es delegable por la nación o pueblo indígena originario campesino en base al principio de libre determinación, cuyo mandato está inserto por su condición de autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la cual no se establece ni rige por mecanismos convencionales, sino por normas y procedimientos propios"

COPA, Magali (Compilación preliminar) (2018). Jurisprudencia relevante sobre autogobierno y pueblos indígena en base a página del Sistema de Información Constitucional Plurinacional (<https://buscador.tcpbolivia.bo>). En: Curso virtual. Autonomías en Bolivia: perspectivas y alternativas. La Paz: IPDRS-Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural.